



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 782/2020
TERCERA SALA UNITARIA

ACTOR: [REDACTED]

DEMANDADOS: SECRETARÍA DEL TRANSPORTE DEL
ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL
ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA, JALISCO

SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

SECRETARIO: JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

Guadalajara, Jalisco, 30 treinta de octubre de 2020 dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, así como la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y;

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED] quien por su propio derecho promovió Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 3 tres de marzo de 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Secretaría del Transporte, Secretaría de Seguridad, la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, así como a la Secretaría de la Hacienda Pública; y como actos administrativos impugnados las cédulas de notificación de infracción folios **113|250853114**, **113|268459960**, **113|292079125**, **113|269898798**, **113|283914321**, **113|275963607**, **113|278423034**, **113|278739937**, **113|289508023**, **113|280885800**, **113|265049460** y **113|204235082**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte del Estado y Secretaría de Seguridad, así como las cédulas de notificación folios **113|6893375**, **113|6902288**, **113|7216771**, **113|7327970** y **113|7494544** emitidas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, al igual que las multas, recargos y gastos de ejecución folios **M 617004202775**, así como el crédito **17004259640**, determinados por personal adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las documentales, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados.

También se requirió a las demandadas, para que al momento de producir contestación a la demanda, exhibieran copias certificadas de los actos controvertidos, apercibidas que en caso de no hacerlo así, se les aplicaría cualquiera de las medidas de apremio de las previstas en el artículo 10, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esos documentos; sin que al efecto, Secretaría del Transporte y Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara hayan cumplido con dicha determinación, razón por la cual en el proveído de 8 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que no cumplieron con dicho requerimiento, en consecuencia se les hizo efectivo el citado apercibimiento y se **presumieron como ciertos los hechos** que la



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

parte actora pretende acreditar con las documentales consistentes en las copias certificadas de las cédulas de notificación de infracción controvertidas, salvo disposición en contrario; tal como se desprende de la actuación que se encuentra glosada a las presentes actuaciones (fojas 48 y 49).

3. Con fecha 8 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo a la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, así como a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quienes comparecieron en representación y sustitución de las autoridades demandadas –Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de la Hacienda Pública y Secretaría de Seguridad-, produciendo contestación a la demanda entablada en su contra, por opuestas las excepciones y defensas que de sus escritos se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, las documentales, de la segunda autoridad, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; de ambas autoridades, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples de los escritos de contestación a la demanda se ordenó correr traslado al actor para que se imponga de sus contenidos.

En ese orden de ideas se tiene al representante legal de la Secretaría de Seguridad, exhibiendo las copias certificadas de las cédulas de notificación de infracciones folios **25085311-4, 28391432-1 y 28950802-3**; por lo que se le concedió al demandante el término de 10 diez días, para que ampliara su demanda, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le declararía por perdido ese derecho y esta Sala determinaría lo que en derecho correspondiera.

De igual manera se tuvo al representante legal de la Secretaría de la Hacienda Pública, exhibiendo la copia certificada de la de la Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual y Tarjeta de Circulación y Holograma folio **M417004200842**, vinculado al crédito fiscal **17004259640**.

Contario a lo anterior, se dio cuenta que la diversa autoridad demandada – Secretaría del Transporte-, no produce contestación a la demanda entablada en su contra, no obstante de haber sido debidamente emplazada, razón por la cual se le hace efectivo los apercibimientos contenidos en el acuerdo de radicación de demanda y se le declaró la correspondiente rebeldía, teniéndole como ciertos los hechos que les fueron

imputados por el actor de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se le declaró por perdido el derecho a rendir pruebas.

4. Mediante auto de fecha 8 ocho de octubre de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que el demandante fue omiso en ampliar su demanda, por lo que se le declaró por perdido ese derecho.

Asimismo, por lo anterior y en razón de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, y que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan alegatos, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

5. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia se les hacen efectivos los apercibimientos contenidos en el párrafo que antecede y se les **declara** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dictara la Sentencia Definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5 y 10, y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con la documental que obra agregada a foja 6, 7, 8, 42, 43 y 44, a la que se le otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48¹, 57² y 58³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los

¹ Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolucón de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho;



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

diversos numerales 399⁴ y 400⁵ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. *De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador*

y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

² Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

³ Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

⁴ Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

⁵ Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.

realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.)

IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de impugnación realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudian las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer la el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad y la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada – Secretaría de la Hacienda Pública-, en escrito de contestación de demanda, prevista por la fracción IX del artículo 29, en relación con el 30, fracción I⁶ y el artículo 3, fracción II, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa que literalmente establece:

“Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.”

Refiere el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, que no le reviste el carácter de autoridad demandada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, fracción II, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en el cual se establece que es autoridad demandada la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución o tramite el procedimiento impugnado o que la sustituya legalmente, y en la especie el referido, no dictó, ni ordenó, ni ejecutó, ni trato de ejecutar los actos impugnados, tal y como se desprende de los folios 113|268459960, 113|292079125, 113|269898798, 113|275963607, 113|278423034, 113|278739937, 113|280885800, 113|265049460, 113|204235082, señalados en la propia demanda como actos reclamados.

⁶ Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

Por otro lado, el representante legal de la Secretaría de la Hacienda Pública que se actualiza la diversa causal aducida, toda vez que, el acto que se estudia en este aparatado, consistente en la multa y requerimiento de pago que menciona el promovente identificado con el folio M417004200842 vinculado al crédito fiscal 17004259640, constituye un acto cuya ejecución se ubica en el procedimiento administrativo de ejecución, por ende no puede ser materia de impugnación porque no constituye una resolución definitiva, esto en razón de que las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de su publicación de la citada convocatoria.

Al respecto, se **desestima** la causal de improcedencia aducida, lo anterior toda vez que, mediante publicación realizada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve se publicó el acuerdo DIGELAG ACU 063/2019, expedido por el GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, que contiene el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con el cual se le dio el carácter de autoridad al asumir funciones hasta entonces encomendadas a la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por el inciso a), fracción II, del artículo 3⁷, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

“Sexto. Los asuntos que se encuentran en trámite en la fecha en que entre en vigor este Reglamento serán turnados a la unidad administrativa a la que corresponda, según la nueva determinación de competencias, de conformidad con el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos serán distribuidos por el Secretario de acuerdo al ámbito de facultades que a cada unidad administrativa le corresponda.”

De igual manera **desestima** la causal de improcedencia invocada por la Secretaría de la Hacienda, toda vez que contrario a lo que alega la citada autoridad, las Imposiciones de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma, **contiene** un crédito fiscal que se pretende hacer efectivo a la parte actora, resultando ser actos administrativos que si le generan un

⁷ *Ibid.*

perjuicio directo a la esfera jurídica y patrimonial del actor, de ahí que si constituye una resolución definitiva impugnada ante este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación al artículo 14, fracciones XII y LXXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Expuesto lo anterior, se da cuenta que no se aprecia la existencia de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, por lo cual, es posible realizar el estudio de los conceptos de nulidad que hace valer la parte actora.

V. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones combatidas y más benéfica para la parte actora, atento al citado dispositivo legal así como a la tesis que aquí se inserta:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. *En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el*



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos.”(Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril 2007. Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.)

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, de la lectura integral que se hace del primer concepto de impugnación que vierte en su escrito de inicial de demanda, mediante el cual, medularmente señala que los actos combatidos no le fueron debidamente notificados, por el que considera que deberá declararse la nulidad de las mismas.

Al manifestarse a lo anterior la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada -Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco-, en su escrito de contestación de demanda, sostiene que resulta inoperante por infundado el señalamiento que hace valer el accionante, toda vez que el acto impugnado se encuentra suficiente y debidamente fundado y motivado, así mismo cumple con los requisitos de validez, pues de manera clara y precisa se señalan las circunstancias de modo tiempo y lugar, el nombre y la firma del vigilante, así como el motivo de la sanción y es suscrito por el vigilante adscrito a la Unidad Departamental de Estacionamientos, esto es por ubicarse en la hipótesis contenida en la fracción I, del artículo 73 del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara.

Por su parte, el Director General Jurídico, Representante Legal de la autoridad demandada -Secretaría de Seguridad-, en su escrito de contestación de demanda recepcionado por la Oficialía de Partes el 17 diecisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte, (fojas 26 a 29), manifiesta que no es procedente que se señale a la Secretaría de Seguridad como autoridad demandada, puesto que la función la realizo la Secretaría del Transporte.

Luego, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quien compareció en representación de la autoridad demandada -Secretaría de la Hacienda Pública-, en su escrito de contestación de demanda, refiere que resultan inoperantes los argumentos de la contra parte como para efectuar la legalidad de los actos impugnados, relativos a que supuestamente no se efectuó una debida notificación, toda vez que contrario a lo arguye la contraparte, el requerimiento de folio M417004200842, vinculado al crédito fiscal 17004259640, se encuentra legalmente

notificado, notificación que fue practicada legalmente de conformidad a lo establecido en los artículos 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

Sin que al efecto la autoridad demandada –Secretaría del Transporte-, haya realizado manifestación alguna toda vez que en actuación de 8 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, se le declaró la correspondiente rebeldía, teniéndole como ciertos los hechos que le fueron imputados de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, asimismo se le declaró por perdido el derecho a ofrecer pruebas, tal como se desprende de la actuación que obra a fojas 48 y 49.

Resultan **procedentes** los conceptos de impugnación expresados por la parte actora [REDACTED], contenidos en su escrito inicial y de ampliación de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por la fracción II de los artículos 74⁸ y 75⁹ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folios **113|268459960, 113|292079125, 113|269898798, 113|275963607, 113|278423034, 113|278739937, 113|280885800, 113|265049460 y 113|204235082**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte del Estado, así como de las cédulas de notificación de infracciones folios **25085311-4, 28391432-1 y 28950802-3**, emitidas por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, las cédulas de notificación folios **113|6893375, 113|6902288, 113|7216771, 113|7327970 y 113|7494544**, emitidas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, al igual que de la la Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual y Tarjeta de Circulación y Holograma folio **M417004200842**, vinculado al crédito fiscal **17004259640**, elaborada por personal adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública; actos impuestos al vehículo con placas de circulación [REDACTED].

En ese tenor, derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera que le asiste la razón al accionante cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron notificadas, no obstante que la autoridad emisora se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377, así como por la fracción III, del artículo 378, del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de

⁸“Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

I. Reconocer la validez de la resolución o del acto impugnado;
Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

⁹“Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

I. ...

II. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello; además el actor refiere que hasta el momento de la presentación de la demanda desconocía su contenido, tan es así que solicitó se requiriera a las autoridades demandadas para que exhibieran copias certificadas de los actos impugnados y así estar en posibilidad de ampliar su demanda; sin embargo, en auto de 8 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que la –Secretaría del Transporte y la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara-, fueron omisas en remitir la copia certificada de las cédulas de notificación de infracción folios 113|268459960, 113|292079125, 113|269898798, 113|275963607, 113|278423034, 113|278739937, 113|280885800, 113|265049460 y 113|204235082, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte, así como las copias certificadas de las cédulas de notificación folios 113|6893375, 113|6902288, 113|7216771, 113|7327970 y 113|7494544, emitidas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, en consecuencia **se tuvieron por ciertos** los hechos que la parte actora pretende acreditar con esas documentales, por lo que resulta claro que nunca le fueron debidamente notificadas, aunado al hecho de que las cédulas de notificación de infracciones folios 25085311-4, 28391432-1 y 28950802-3, elaboradas por personal por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, datan del 29 veintinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de mayo de 2018 dos mil dieciocho y 22 veintidós de marzo 2019 dos mil diecinueve; y el actor manifestó tener conocimiento de los actos el 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, de ahí que haya excedido en demasía el termino de los sesenta días naturales que las demandadas tenían para notificar las mismas; quedando de manifiesto para esta autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificadas, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de

seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción impugnadas, sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. *La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”*

De igual forma es aplicable la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página: 2645, registro electrónico 160591, que dice:

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por otro lado, se considera que le asiste la razón al accionante, cuando refiere que la Imposición de multa y requerimiento del pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma folio **M417004200842**, vinculado al crédito fiscal **17004259640**, con su respectiva acta circunstanciada de notificación, violenta las formalidades esenciales del procedimiento, así como las garantías de seguridad y de audiencia y defensa, ya que no le fue debidamente notificada dicha imposición, no obstante que la autoridad demandada –Secretaría de la Hacienda Pública-, se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 94¹⁰ del Código Fiscal del Estado de Jalisco, que establece que los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos, así como acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridos **se harán personalmente**, notificaciones que deben efectuarse siguiendo las formalidades que establece el artículo 96 del citado Ordenamiento Legal que dispone:

*“**Artículo 96.-** Las notificaciones personales se harán en el domicilio de la persona, a quien se deba notificar, y que haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se estará a las reglas del artículo 47 de este código. Dichas notificaciones podrán practicarse en*

¹⁰ Artículo 94.- Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridas, se harán personalmente. Se notificará por edictos, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien se deba notificar, o ésta se encuentre fuera del Estado, sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales locales. Se notificará por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no se encuentre después de iniciadas las facultades de comprobación o se oponga a la diligencia de notificación y en los demás casos que señalan las leyes fiscales y este Código.

las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes deba notificarse se presentan, por cualquier circunstancia en ellas, o en el lugar en que se encuentren, previa identificación.

Se entenderán con la persona que debe ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador, cerciorado de que sea el domicilio fiscal, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere, a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más próximo.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, cerciorado nuevamente el notificador de lo establecido en el párrafo anterior y de negarse éste a recibirla se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio.

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación.

De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador levantará acta circunstanciada por escrito.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán gastos de ejecución, a cargo de quien incurrió en el incumplimiento de la obligación.”

De lo anterior se colige que las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal y a falta de este, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se realizará con cualquiera que se encuentre en el domicilio, de negarse a recibirla se realizará por instructivo que se fije en la puerta del domicilio, además de que de toda diligencia de notificación se deberá levantar acta circunstanciada por escrito.



No obstante lo anterior, la parte actora en su escrito inicial de demanda estableció de manera puntual que nunca se le notificó dicho acto, aunado a que dicha circunstancia no se encuentre satisfecha, ni tampoco fue desvirtuada por la autoridad demandada –Secretaría de la Hacienda Pública-, ya que no acredita que se haya efectuado la notificación cumpliendo con los requisitos establecidos en los citados artículos 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, quedando de manifiesto para esta Autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de la Imposición de multa y requerimiento del pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma folio **M417004200842**, vinculado al crédito fiscal **17004259640**, con sus respectiva acta circunstanciada de notificación en materia estatal, sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. *La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con*

el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”

Así entonces, aun cuando se trata de una omisión formal, debe declararse la nulidad lisa y llana, en virtud de que la ausencia de notificar personalmente al actor, no es sujeta de redimirse, ya que los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos impugnados ocurrieron en forma accidental con anterioridad, de manera que no pueden reincorporarse a la actualidad y por tanto, tampoco pueden servir de base para imponer nuevamente la sanción, dada la imposibilidad física y material de repetir esos sucesos y notificarlos de manera personal al infractor.

De esta manera, al haberse declarado la nulidad de las cédulas de notificación de infracción controvertidas, para los efectos precisados en párrafos que anteceden, lo procedente es **declarar la nulidad** de los gastos de ejecución folios **M617004202775**, al encontrar su origen en actos viciados. Se invoca al efecto la tesis emitida por Órganos del Poder Judicial de la Federación, consultable bajo el Número de Registro 252,103 del Semanario Judicial de la Federación, página 280, cuyo epígrafe refiere:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. *Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.”*

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial que dice:



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.” (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Tesis: IV.2º.C.J/9. Página: 1743).

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. [REDACTED], parte actora en el presente juicio, **desvirtuó** la legalidad de los actos administrativos impugnados.

SEGUNDO. Se **declara** la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folios **113|268459960, 113|292079125, 113|269898798, 113|275963607, 113|278423034, 113|278739937, 113|280885800, 113|265049460 y 113|204235082**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte del Estado, así como de las cédulas de notificación de infracciones folios **25085311-4, 28391432-1 y 28950802-3**, emitidas por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, las cédulas de notificación folios **113|6893375, 113|6902288, 113|7216771, 113|7327970 y 113|7494544**, emitidas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de

Guadalajara, al igual que de la la Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual y Tarjeta de Circulación y Holograma folio **M417004200842**, vinculado al crédito fiscal **17004259640**, así como de los gastos de ejecución folio **M617004202775**, determinados por personal adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública; actos impuestos al vehículo con placas de circulación [REDACTED], por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la presencia del Secretario de Sala JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN, quien autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

EL SECRETARIO DE LA SALA

JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

JLGM/JFCG/cnrg.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.